

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/013/2021.

ANTECEDENTES

I. INICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. El diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, se registró en la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (en lo subsecuente Dirección e Instituto) el expediente IEQROO/PES/083/2021, formado con motivo del escrito de queja presentado por el Partido Movimiento Ciudadano, en contra del ciudadano Manuel Tirso Esquivel Ávila, en su calidad de candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, postulado por el Partido Fuerza por México, de la ciudadana Brisa del Mar Rodríguez, en su calidad de Presidenta del Partido Fuerza por México, en el Municipio de Puerto Morelos, así como en contra del propio Partido Fuerza por México, por la probable comisión de actos que trasgreden las normas sobre propaganda electoral, consistentes en actos discriminatorios y vejatorios de los derechos humanos de las mujeres, la entrega de dádivas (pelotas, piñatas, dulces y bloques), ofertar promesas de campaña específicas como empleo seguro e inclusive proporcionar servicios públicos de competencia municipal.

El veinticuatro de agosto del año en curso, se registró en la Dirección el expediente IEQROO/PES/132/2021, y toda vez que guardaba relación con los hechos denunciados en el expediente IEQROO/PES/083/2021, se determinó acumularlo al mismo, registrándose como el expediente IEQROO/PES/083/2021 y su acumulado IEQROO/PES/132/2021 (en adelante el expediente).

El tres de septiembre del año en curso se remitió al Tribunal Electoral de Quintana Roo el expediente, para que dicho Tribunal emitiera la Resolución correspondiente; siendo que la referida autoridad jurisdiccional llevo a cabo la radicación del mismo asignándole el número PES/098/2021.

II. ACUERDO PLENARIO IEQROO. El once de septiembre del año en curso, el Tribunal Electoral de Quintana Roo emitió un Acuerdo Plenario en el que se ordenó el reenvío del expediente PES/098/2021, a esta autoridad, para que se realicen las diligencias ordenadas en el citado Acuerdo Plenario, entre las que se encontraba un requerimiento de información a la persona moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V." (en lo subsecuente la denunciada).

III. NOTIFICACIÓN DE OFICIO DJ/2399/2021. El veintinueve de septiembre del año que transcurre, actuando dentro los autos del expediente y en cumplimiento al Acuerdo Plenario referido en el antecedente inmediato anterior, se le notificó a la denunciada, el oficio DJ/2399/2021, signado por el Maestro Juan Enrique Serrano Peraza, en su calidad de Director

Jurídico del Instituto (en lo subsecuente el oficio), en donde se le realizó un requerimiento de información relacionado con el expediente citado en el penúltimo párrafo del Antecedente I de la presente Resolución, para lo cual se le concedió un plazo de dos días naturales, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva, para dar cumplimiento al mismo; es de señalarse, que una vez fenecido el plazo, no fue atendido dicho requerimiento.

IV. SE ORDENA INICIO DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. El cinco de octubre de la presente anualidad, y actuando dentro del expediente, se emitió un auto en donde ante la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio referido en el antecedente que precede, y que se traduce en una negativa de ello, entre otras cosas, se determinó el inicio de un Procedimiento Ordinario Sancionador en su contra, por actualizarse la infracción prevista en el artículo 398, fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo (en lo subsecuente Ley Local).

V. REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. El doce de octubre del presente año, a las diez horas, en atención a lo referido en el antecedente inmediato anterior, se emitió la constancia de registro correspondiente, quedando registrado bajo el número de expediente **IEQROO/POS/013/2021**, asimismo, en la referida constancia de registro, se determinó agregar al referido expediente las copias certificadas de las siguientes documentales realizadas en el expediente, de conformidad con lo siguiente:

1. Auto de fecha cinco de octubre del año en curso.
2. Oficio DJ/2399/2021.
3. Citatorio y Cédula de Notificación, mediante las cuales se llevó a cabo la notificación del oficio DJ/2399/2021.

VI. CONSTANCIA DE ADMISIÓN. El catorce de octubre del año en curso, se emitió la constancia de admisión correspondiente, en donde se determinó emplazar al presunto responsable.

Cabe señalar que el diecinueve de octubre del año en curso, mediante el oficio respectivo, se materializó la notificación ordenada en la constancia de mérito; no obstante lo antes indicado el presunto responsable no compareció a manifestar lo que en derecho correspondiera, o bien, a ofrecer pruebas, en virtud del emplazamiento de referencia.

VII. CONSTANCIA DE ADMISIÓN DE PRUEBAS. El veintiséis de octubre de la anualidad que transcurre, ante la omisión de la denunciada de dar contestación al emplazamiento referido en el antecedente inmediato anterior, se emitió la constancia de admisión de pruebas correspondientes, en la que se fijó las doce horas del veintisiete de octubre del año en curso para llevar a cabo el desahogo de las pruebas correspondientes en el expediente.

VIII. CONSTANCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS. El veintisiete de octubre del año que transcurre, se emitió la constancia de desahogo de pruebas, en donde entre otras cosas, se determinó dar

vista al presunto responsable, para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho correspondiera.

Cabe señalar que el cuatro de noviembre del año en curso, mediante el oficio respectivo, se materializó la notificación ordenada en la referida constancia, no obstante lo anterior, el presunto responsable no compareció a formular alegatos.

IX. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Conforme a lo anterior, fenecido el plazo para que el presunto responsable en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho correspondiera, sin que la misma hubiera comparecido al efecto, el once de noviembre del año en curso, se emitió el auto mediante el cual se tuvo por concluida la instrucción del asunto de mérito, por lo que consecuentemente se determinó realizar el proyecto de Resolución correspondiente, a efecto de turnarlo en su oportunidad a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto (en lo subsecuente la Comisión), por conducto de su Presidencia, para su análisis respectivo dentro del plazo previsto al efecto.

X. REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN A LA COMISIÓN. El veintitrés de noviembre del año en curso, la Dirección, mediante el oficio correspondiente, remitió el proyecto de Resolución a la Consejera Presidenta de la Comisión, para su conocimiento y estudio.

XI. SESIÓN DE LA COMISIÓN. El veintiséis de noviembre del año en curso, se llevó a cabo la sesión de la Comisión, en la que, por unanimidad de votos, se aprobó el proyecto de Resolución referido en el antecedente inmediato anterior, y se determinó remitirlo a la Presidencia del Consejo General del Instituto, con el propósito de que en su oportunidad fuera presentado a la consideración del órgano superior de dirección de este Instituto.

Al tenor de los antecedentes que preceden, y

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA. Que con fundamento en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C, numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 98, numerales 1 y 2, y 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 120, 123, 125, 137 en su fracción XIII, 140, 157 fracción IX, 410, 415, 416, 423 último párrafo y 424 de la Ley Local, así como los preceptos 28 primer párrafo, y 66 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto (en lo subsecuente el Reglamento), el Consejo General del Instituto (en lo subsecuente el Consejo) es competente para emitir la presente Resolución.

2. FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. Que el artículo 410 de la Ley Local, dispone que el procedimiento ordinario sancionador se aplicará para el conocimiento de las faltas, y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere

la propia Ley Local, asimismo establece que los órganos competentes para su tramitación y resolución son el Consejo, la Comisión y la Dirección.

Aunado a lo anterior, el artículo 417 de la Ley Local, señala que la Dirección procederá al análisis del escrito de queja presentado, para determinar la admisión o desechamiento de la misma, por su parte el artículo 422 de la Ley Local, establece que la investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.

3. VISTA. El cinco de octubre del año en curso, en atención a la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, la Dirección emitió un auto en donde se determinó iniciar un procedimiento ordinario sancionador en contra de la denunciada; lo anterior de conformidad con el artículo 415 de la Ley Local en correlación con el artículo 28 párrafo primero del Reglamento, que establecen lo siguiente:

“Artículo 415. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto Estatal tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.

Artículo 28. Con independencia de los medios de apremio que se puedan imponer para hacer eficaces las determinaciones dictadas, se podrá dar inicio el procedimiento sancionador que corresponda por la afectación a las normas de orden público derivado del incumplimiento o contumacia del sujeto obligado.

Por cuanto hace a los órganos del Instituto, así como a las autoridades y titulares de las notarías públicas, las medidas de apremio se aplicarán sin perjuicio de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse.”

4. ELEMENTOS PROBATORIOS. Para acreditar el incumplimiento se agregó al expediente de mérito la **Documental Pública**, consistente en la copia certificada de las siguientes actuaciones realizadas en el expediente, de conformidad con lo siguiente:

1. Auto de fecha cinco de octubre del año en curso.
2. Oficio DJ/2399/2021.
3. Citatorio y Cédula de Notificación, mediante las cuales se llevó a cabo la notificación del oficio DJ/2399/2021.

En las que consta la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio DJ/2399/2021, y que se traduce en una negativa de ello.

Es de señalarse que la denunciada no ofreció manifestación o medio de prueba alguno para desvirtuar de modo alguno la negativa de su parte de atender en tiempo y forma el requerimiento el cual constituye su infracción.

5. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.

De la **Documental Pública**, consistente en la copia certificada de las actuaciones realizadas en el expediente, se obtiene la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio DJ/2399/2021, y que se traduce en una negativa de ello; probanza que con fundamento en el artículo 413, párrafo segundo de la Ley Local, adquiere valor probatorio pleno para los efectos de la presente Resolución, sin que exista controversia sobre su contenido y alcance probatorio.

6. ESTUDIO DE FONDO.

Primeramente, es de señalarse el marco normativo aplicable al caso, de donde se desprende lo dispuesto por el artículo 398, fracción I de la Ley Local, así como los preceptos 20 y 23 del Reglamento, mismos que son del tenor literal siguiente:

“Artículo 398. Constituyen infracciones de la ciudadanía, de los dirigentes, así como personas afiliadas y partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:

I. La negativa a entregar la información requerida por el Instituto Estatal; entregarla en forma incompleta o con datos falsos o fuera de los plazos que señale el requerimiento; respecto de las operaciones mercantiles, dejar de informar sobre los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, las personas aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas a cargos de elección popular;

II. ...

III. ...

IV. ...

Artículo 20. En las constancias de registro o admisión de la queja, se determinará la inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba que se requieran, así como las diligencias necesarias de investigación para allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo, sin perjuicio de dictar diligencias posteriores con base en los resultados obtenidos de las primeras investigaciones. Para tal efecto, la Dirección podrá solicitar el apoyo y colaboración, mediante oficio, a los órganos centrales o desconcentrados del Instituto.

Artículo 23. Los partidos políticos, candidatas, candidatos, agrupaciones políticas, organizaciones, personas afiliadas, militantes, dirigentes partidistas, así como las personas físicas y morales también están obligados a remitir la información que les sea requerida por la Dirección.”

De lo anteriormente expuesto es posible establecer que las personas morales cometen una infracción a la Ley Local cuando incumplen cualquiera de las disposiciones contenidas en la misma, como lo es la dispuesta en la fracción I del artículo 398 de la ley en cita, en donde se establece como infracción a la citada ley la negativa de entregar la información que les sea requerida por el Instituto.

Luego entonces, del análisis del medio de prueba que obra en el presente asunto, así como de la normatividad antes referida, se desprende la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello.

Derivado de lo anterior y en estricto apego a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento, la Dirección inició de oficio el procedimiento ordinario sancionador que nos ocupa.

Siendo importante establecer que tal y como consta en autos del presente expediente, la denunciada no dio contestación al emplazamiento que le fue realizado, ni mucho menos a la vista que le fue realizada para que en vía de alegatos manifestara lo que a su derecho correspondiera; luego entonces no obra en autos manifestación alguna con la que pretenda desvirtuar las imputaciones que son realizadas en su contra.

Asimismo, sin que ello sea una eximente de responsabilidad con relación a la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, no debe pasar desapercibido que en la constancia de admisión se establecieron los motivos, así como los fundamentos legales por los cuales se inició el procedimiento correspondiente, siendo que posteriormente se realizó el debido emplazamiento, en aras de garantizar el debido proceso.

Por lo anteriormente expuesto, es evidente la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio DJ/2399/2021, y que se traduce en una negativa de ello, toda vez que tal y como quedó establecido en líneas precedentes obra en autos del expediente en que se actúa la documental pública consistente en la copia certificada de las actuaciones mediante las cuales le fue notificado el oficio en cuestión, sin que obre medio probatorio alguno que acredite que la denunciada dio contestación a dicho requerimiento de información; por lo que con las constancias que obran en el expediente en que se actúa **SE ACREDITA** fehacientemente el incumplimiento respectivo, mismo que se encuentra previsto en la fracción I del artículo 398 de la Ley Local.

7. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez acreditada la conducta consistente en la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, para determinar el tipo de sanción a imponer a la responsable de la misma, debe precisarse que la Ley Local confiere a esta autoridad en su ejercicio sancionador de conductas contraventoras al marco normativo aplicable, discrecionalidad para elegir, dentro del catálogo de correctivos

aplicables, aquel que se ajuste a las circunstancias particulares a la conducta desplegada por el sujeto infractor y a las propias del responsable en lo individual.

En el caso a estudio, con relación a las sanciones que se pueden imponer es de señalarse que el artículo 406 de la Ley Local establece en su fracción IV las sanciones aplicables, entre otros, a las personas morales, estableciendo que estas son en el caso de que promuevan una denuncia frívola, lo cual no acontece en el presente asunto, más no pasa desapercibido para esta autoridad, que del análisis integral de la Ley Local, específicamente del Capítulo Tercero “De las Sanciones”, del Título primero, del Libro Séptimo, no se desprende porción normativa alguna que establezca un catálogo de sanciones que se puedan imponer a las personas morales cuando se actualice el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en dicha Ley por parte de las referidas personas morales. En consecuencia, para los efectos del presente asunto se tomarán como sanciones a imponer, las contenidas en la citada fracción IV del artículo 406 de la Ley Local, las cuales son del tenor literal siguiente:

“Artículo 406. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

...

IV. Respecto de la ciudadanía, de los dirigentes y personas afiliadas a los partidos políticos, aspirantes, personas precandidatas y personas candidatas o de cualquier persona física o moral en el caso de que promuevan una denuncia frívola:

a) Con amonestación pública;

b) Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los partidos políticos con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

c) En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en el caso de que promuevan una denuncia frívola.

d) Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.”

Al respecto, cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Tomando en consideración los elementos objetivos de la infracción y los efectos de la falta acreditada, se determina que la denunciada debe ser objeto de sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadirla de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

De esta manera, una vez que se ha determinado la existencia de los hechos denunciados lo concerniente es proceder en términos de lo previsto en el artículo 407 de la Ley Local que prevé los parámetros que debe tomar en cuenta este órgano de máxima dirección para la individualización de las sanciones, considerando:

- I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley Local, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;
- II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
- III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;
- IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;
- V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
- VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Circunstancias de tiempo, modo y lugar.

- **Modo:** La infracción consistió en la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio DJ/2399/2021, derivado de la instrucción de un procedimiento especial sancionador dentro del proceso electoral local 2020-2021, y que se traduce en una negativa de ello, que consecuentemente trastoca la impartición de justicia electoral.

- **Tiempo:** La omisión de la denunciada transcurrió al vencimiento del periodo de dos días naturales que le fue concedido (del treinta de septiembre al primero de octubre del año en curso), para dar contestación al requerimiento que le fue realizado mediante el oficio.

- **Lugar:** El incumplimiento motivo del presente asunto deviene de la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, contestación que debió ser presentada en la oficialía de partes del

Instituto, misma que se encuentra ubicada en esta ciudad capital, por lo que dicha ciudad corresponde al lugar en donde acontecieron los hechos.

Condiciones externas y los medios de ejecución

En la especie, tal como quedó asentado en los párrafos anteriores, la conducta atribuida a la denunciada, actualiza la omisión de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, vulnerando con ello la fracción I del artículo 398 de la Ley Local; y toda vez que la finalidad del legislador es garantizar el cumplimiento de los preceptos contenidos en la normatividad electoral, se tiene por acreditada la conducta atribuida a la denunciada.

Por tanto, el medio de ejecución consiste en una negativa, una omisión de hacer, tal como ha sido precisado con anterioridad.

Reincidencia

Por cuanto a la reincidencia en que pudo haber incurrido la denunciada, el Instituto considera que no se actualiza.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 407 de la Ley local, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la Ley Local, incurra nuevamente en alguna infracción al referido ordenamiento legal, dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción mediante Resolución o sentencia firme.

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por la Sala Superior, a través de la Jurisprudencia 41/2010, de rubro ***"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN"***.

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme, incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

En este sentido, este órgano de máxima dirección considera que no se actualiza dicho supuesto por cuanto hace a la denunciada, pues ni en los archivos del Instituto, ni en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Infracciones a la Normatividad Local en Materia Electoral, obra alguna resolución en la que se haya sancionado a la denunciada por faltas como la que se sanciona por esta vía, que se haya dictado con anterioridad a los hechos materia de la presente denuncia.

Beneficio o lucro.

No se acreditó un beneficio económico cuantificable conforme a los elementos que obran en el expediente que se resuelve.

Singularidad o pluralidad de la falta.

Las conductas sancionables por la norma, pueden realizarse en una o varias acciones, de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales. Así, a partir de las consideraciones que han sido sostenidas en la resolución que ahora se emite, se puede concluir que la conducta atribuible a la denunciada, se realizó al incumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 398 de la Ley Local, por cuanto, a su omisión de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se tradujo en una negativa de ello; en consecuencia se trató de una conducta infractora de un hacer que de manera singular y directa efectuó la denunciada.

Intencionalidad.

Antes de determinar si las conductas desplegadas, fueron realizadas de forma dolosa o culposa, es de señalarse el criterio normativo aplicable al caso, para lo cual debe tenerse presente que de conformidad con la tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior, de rubro **"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL"**, los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador, toda vez que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal, son manifestaciones del *ius puniendi* estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies.

En esta lógica, es importante destacar, como marco referencial, que de acuerdo con el artículo 9 del Código Penal Federal obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por dicha Ley; asimismo, se establece que obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

En ese sentido, para determinar que el sujeto activo actuó de forma dolosa en la comisión de una conducta no basta con asumir que la o el infractor tenían conocimiento de que su actuar, positivo (acción) o negativo (omisión), podían tener consecuencias jurídicas, esto es, que su conducta era ilícita y, por lo tanto, sería susceptible de ser sancionada, sino que se requiere demostrar con elementos objetivos que el infractor tenía el deseo de provocar las consecuencias lesivas de la conducta.

En otras palabras, para calificar una conducta dolosa se requiere que el resolutor demuestre indubitadamente la existencia del elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra el bien jurídico, en caso contrario, se estará ante una conducta culposa, pues si bien en este caso el infractor es consciente de que su conducta produce o puede producir efectos lesivos, no los acepta ni los desea directamente, y generalmente se producen por su negligencia, su imprudencia, su falta de atención, de pericia, de precauciones o de cuidados necesarios.

Una vez establecido lo anterior, este Consejo General estima que el actuar de la denunciada fue doloso, pues a sabiendas que debía proporcionar al Instituto la información que le fue requerida, fue omisa en dar contestación al requerimiento que le fue realizado; se dice lo anterior, toda vez que tal y como obra en autos del expediente en que se actúa la denunciada fue debidamente notificada el día veintinueve de septiembre del año en curso, máxime que en el oficio de mérito, en su parte conducente se estableció lo siguiente *"Asimismo, se hace de su conocimiento que en apego a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, en caso de incumplimiento, será acreedor a una medida de apremio, sin perjuicio de que se le pueda iniciar un procedimiento sancionador oficioso."*, haciendo evidente su intención de no proporcionar la información que le fue requerida, por lo que quiere y acepta el resultado de dicha omisión.

Bien jurídico tutelado.

La fracción I del artículo 398 de la Ley Local, tiene como finalidad, entre otras cosas, que las personas morales den cumplimiento a los requerimientos de información que les sean realizados por el Instituto.

Gravedad.

Al respecto es de señalarse que la Ley Local en su artículo 406, fracción IV establece un orden de prelación en sus sanciones, siendo el siguiente:

- Con amonestación pública.
- Respecto de la ciudadanía, las dirigencias y personas afiliadas de los partidos políticos con multa de hasta dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (en lo subsecuente UMA); siendo que los hechos denunciados acontecieron el uno de octubre del dos mil veintiuno, fecha en la que la UMA vigente correspondía a 89.62¹.
- En caso de reincidencia, con multa de hasta mil veces el valor diario de la UMA, en el caso de que promuevan una denuncia frívola.
- Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Estas tasaciones implican que se deben de atender cada uno de los elementos que el propio artículo prevé y los cuales han sido señalados previamente y de acuerdo a este análisis se debe de situar una gradualidad entre los límites inferior y superior, según la gravedad de la falta pudiendo ir de *"levísima, leve o grave, y en este último caso precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor"*²

Conforme a lo anterior y atendiendo a las circunstancias, este Consejo General estima que la infracción en que incurrió la denunciada debe calificarse como **grave ordinaria**, ya que la falta cometida tuvo incidencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, toda vez que el requerimiento de información que dio origen a la omisión de la denunciada deriva de una diligencia de investigación ordenada dentro del expediente IEQROO/PES/083/2021 y su acumulado IEQROO/PES/132/2021, para que en el mismo obren los elementos suficientes y necesarios con los cuales, en su momento, el Tribunal Electoral de Quintana Roo pudiera resolver el citado expediente; en consecuencia, la omisión de la denunciada generó una incorrecta integración de un procedimiento especial sancionador, situación con la que se llevó a cabo una obstaculización en la impartición de justicia por parte del Tribunal Electoral de

¹ Consultable en <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

² SCM-JE-61/2018 Y ACUMULADO y SCM-JRC-69/2018

Quintana Roo dentro del proceso electoral local 2020-2021, toda vez que para resolver el procedimiento especial sancionador lo hizo sin la información que le fue requerida a la denunciada.

Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el propio Tribunal Electoral de Quintana Roo, al resolver el expediente PES/098/2021, determinó dejar a salvo los derechos del partido Movimiento Ciudadano para promover las acciones legales conducentes, al tenor literal siguiente:

"Cabe precisar, que se dejan a salvo únicamente los derechos del partido político MC, para que en el momento procesal oportuno, y una vez que se resuelve el Procedimiento Ordinario Sancionador promovido oficiosamente por la autoridad instructora, contra la razón social "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V., pueda si así conviniera a sus intereses promover las acciones legales conducentes.

Salvedad anterior, que no se realiza por cuanto al PES toda vez, que como es de conocimiento público, dicho partido nacional perdió su registro ante el Instituto Nacional Electoral, el pasado treinta de septiembre; y su acreditación ante el Consejo General del Instituto, el pasado once de octubre, según consta en la resolución IEQROO/CG/R-030-20217."

Sin embargo, pese a la información que los quejosos allegaron a la autoridad instructora, y a las investigaciones realizadas, no se pudieron recabar pruebas o constancia alguna que de manera por lo menos indiciaria pudiera generar convicción de que los hechos pudieran efectivamente haber acontecido. Ya que de las constancias que obran en autos del expediente, no se pudo corroborar que efectivamente el otrora candidato entregó dichos bienes, en primera por que la razón social "Arenas y Bloque Comercializadora S.A de C.V.", no dio contestación a los diversos requerimientos de información que la autoridad instructora le realizó, por lo que, fue necesario ordenar el inicio oficioso de un Procedimiento Ordinario Sancionador contra la empresa, ante dicha omisión.

Ahora bien, por cuanto a la sanción a imponer, se considera que la sanción prevista en el artículo 406, fracción IV, inciso b), de la Ley local, consistente en una multa de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, es proporcional a los hechos denunciados, ello es así por la naturaleza de la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio, y que se traduce en una negativa de ello, toda vez que dicha omisión originó una incompleta substanciación del expediente, ocasionando que el mismo fuera remitido al Tribunal Electoral de Quintana Roo sin la respuesta al requerimiento de mérito, por lo que, con la presente multa se busca que la denunciada no repita la conducta realizada, y de esta forma sentar un precedente para que las demás personas morales y ciudadanía en general se abstengan en lo futuro de cometer este tipo de conducta.

En ese contexto, la sanción antes referida, y que consiste en sanción de carácter económico, tiene como propósito no solo combatir la conducta contraria a derecho sino también disuadir a

su autora de repetirla, por lo que esta autoridad considera que en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos mencionados, lo procedente es imponer una multa económica, pues tal medida permitirá cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, así lo ha sostenido la Sala Superior al considerar que, *"...en términos similares a lo que ocurre con otro tipo de consecuencias del ilícito en el ámbito del derecho administrativo sancionador electoral, a las sanciones administrativas en la materia les son aplicables, con algunos matices, los principios de prevención general y prevención específica desarrolladas en el derecho penal. Conforme con tales principios, las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como la o el partícipe de un ilícito, no cometan nuevas y mucho menos, las mismas violaciones a las disposiciones legales, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de Derecho"*³.

En consecuencia, se considera adecuado, racional y proporcionado imponer una **MULTA ECONÓMICA** como sanción, debido a que realizó culposamente, actos que contravienen la normatividad aplicable en la materia, consistente en la omisión de la denunciada de proporcionar la información requerida mediante el oficio DJ/2399/2021, y que se traduce en una negativa de ello, en términos de lo que se resuelve en la presente Resolución.

Ahora bien, para la cuantificación de la multa referida en el párrafo inmediato anterior, esta autoridad debe tener en consideración cada uno de los parámetros del artículo 407 de la Ley Local, mismos que han sido desahogados con anterioridad, con el fin de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, y fijar el monto de la multa dentro del mínimo y el máximo autorizado por la Ley Local.

Bajo esa premisa, deberá hacerse la cuantificación de la multa a imponer, la cual se encuentra establecida en el inciso b), fracción IV, del propio artículo 406, en donde se establece como tope máximo de la multa hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, pudiendo determinarse una multa que se encuentre entre el mínimo es decir de uno a dos mil UMA.

Lo anterior tomando como criterio orientador la Tesis XXVIII/2003, emitida por la Sala Superior, de rubro **"SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES"**, en donde se establece que una vez acreditada la infracción le corresponderá al responsable al menos la imposición del mínimo de la sanción señalada, y se deberán considerar las circunstancias generales de cada infractor para el incremento de dicha sanción.

De igual manera, en concordancia con lo sostenido en la Jurisprudencia 10/2018, emitida por la Sala Superior, de rubro **"MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN"**, y toda vez que los hechos denunciados acontecieron el uno de octubre del dos mil veintiuno, fecha en la que la

³ SUP-RAP-210/2017

UMA vigente correspondía a 89.62⁴, por lo que esa cantidad se tomará como base para la fijación de la multa correspondiente.

En ese sentido, tomando en cuenta las circunstancias objetivas que rodean la infracción; la culpa, que no existe reincidencia, que no se acreditó un beneficio económico cuantificable, que el acto se llevó a cabo el día de uno de octubre del año dos mil veintiuno, así como la gravedad del acto, se arriba a lo siguiente:

En el presente asunto, debemos partir del hecho que la conducta acreditada por la autoridad sustanciadora en el presente procedimiento sancionador es grave ordinaria, por tratarse de una falta que se cometió derivado de una omisión de proporcionar la información requerida por el Instituto, y que se traduce en una negativa de ello, lo cual resultó en una incompleta sustanciación del procedimiento especial sancionador IEQROO/PES/083/2021 y su acumulado IEQROO/PES/132/2021, en ese sentido, la multa que esta autoridad administrativa le imponga a la infractora debe ser proporcional y suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, asimismo, debe cumplir una función preventiva dirigida a otras personas morales y a la ciudadanía en general a fin de evitar que este tipo de conductas sean reiteradas. Aunado a lo anterior, debe ser ejemplar para que la infractora se abstenga de cometer la misma conducta en ocasiones futuras.

Por otra parte, en relación a las condiciones socioeconómicas de la denunciada, debe decirse qué si bien en el expediente no obra dato alguno al respecto, en atención a la conducta omisa asumida en diversas oportunidades dentro de la secuela procesal del procedimiento que se resuelve, es decir a requerimiento de la autoridad y en el emplazamiento para los efectos conducentes, se considera en relación a ello, que es una persona moral con actividades preponderantemente económicas dedicada a la actividad comercial dentro de la industria de la construcción, como se consta en los autos del expediente PES/098/2021 del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de cual se derivó el procedimiento motivo de esta Resolución.

Es por lo anterior, que considerando los elementos antes referido, y que en el año en que se efectuó la conducta que se sanciona en el presente procedimiento sancionador, el valor del UMA es de \$89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 Moneda Nacional), por lo que consecuentemente, se impone una multa consistente en una cuarta parte de la sanción referida en el artículo 406, fracción IV de la Ley Local, consistente en quinientas UMA, equivalente a \$44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), la cual hará efectiva en los términos y condiciones que se establecen en la presente ejecutoria.

Cabe señalar, que la multa antes citada se basa en los elementos objetivos que se analizaron previamente, en el que se determinó que el grado de culpabilidad de la denunciada es grave ordinaria, por lo que es posible fijar la multa económica equivalente a una cuarta parte de la

⁴ Consultable en <https://www.inegi.org.mx/temas/uma/>

sanción máxima establecida, buscando en todo momento la proporcionalidad sin dejar de buscar el carácter inhibitoria de la misma.

8. PAGO DE LA MULTA.

A efecto de dar cumplimiento a la sanción que ha sido impuesta en términos del artículo 407 párrafo tercero de la Ley Local, la denunciada deberá de pagar la siguiente cantidad:

Infractor	Valor del UMA	Veces UMA	Total en Pesos
Persona Moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V."	89.62	500	\$44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional)

Por cuanto a la multa impuesta, con fundamento en el artículo 407, párrafo tercero de la Ley Local, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deberá ser pagada en la Dirección de Administración del Instituto, en un plazo improrrogable de quince días hábiles contados a partir de la notificación de dicha ejecutoria; si el infractor no cumple con su obligación, se procederá a su cobro conforme a la ley aplicable al caso.

Finalmente es de señalarse que en términos del artículo 407 último párrafo de la Ley Local los recursos obtenidos de la sanción económica aquí señalada serán aplicados a la ejecución de programas de cultura política por parte de este Instituto.

En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, se estima que la sanción que se impone es suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por parte de ella u otro sujeto.

Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que los hechos denunciados actualizan la infracción establecida en el artículo 398, fracción I de la Ley Local; lo procedente es declarar **FUNDADA** la comisión de la conducta denunciada en términos de lo razonado previamente y de acuerdo a las constancias que obran en el expediente que se resuelve.

Hecho lo anterior, y ante la vulneración comprobada de la responsable, lo procedente es registrarla en el Catálogo de sujetos sancionados por infracciones a la normatividad local del Instituto, lo anterior en términos del artículo 159 del Reglamento; dicho registro se realizará en tanto la presente Resolución haya quedado firme o ejecutoriada y no admita recurso en contra. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 163 del Reglamento, efectuado el registro la responsable deberá permanecer en el Catálogo antes referido, por un plazo de cuatro años.

En consecuencia de lo antes expuesto, se emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declaran existentes las conductas que le son imputadas a la persona moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V." en el procedimiento ordinario sancionador **IEQROO/POS/013/2021**, mismo que fuera iniciado de oficio en atención a la omisión de la referida persona moral, de proporcionar la información que le fue requerida mediante el Oficio DJ/2399/2021, misma que se traduce en una negativa de ello, por las razones expuestas en la presente Resolución.

SEGUNDO. Se impone la sanción consistente en una **MULTA ECONÓMICA** por la cantidad de \$44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) a la persona moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V.", lo anterior con fundamento en el artículo 406, fracción IV, inciso b) de la Ley Local, conforme a lo razonado en la presente Resolución.

Por cuanto a la multa impuesta, con fundamento en el artículo 407, párrafo tercero de la Ley Local, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, deberá ser pagada en la Dirección de Administración del Instituto, en un plazo improrrogable de quince días hábiles contados a partir de la notificación de dicha ejecutoria; si la responsable no cumple con su obligación, se procederá a su cobro conforme a la ley aplicable al caso.

TERCERO. Notifíquese personalmente la presente Resolución, a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, a la persona moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V.", para los efectos legales a que haya lugar.

CUARTO. Regístrese a la persona moral "Arenas y Bloques Comercializadora, S.A. de C.V." en el Catálogo de sujetos sancionados por infracciones a la normatividad local del Instituto; dicho registro deberá ser conservado por cuatro años en el referido Catálogo.

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución, mediante atento oficio por correo electrónico, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, a las y los integrantes del Consejo General, de la Junta General y al Titular del Órgano Interno de Control, todos de este Instituto.

SEXTO. Archívese, en su oportunidad, el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

SÉPTIMO. Publíquese y difúndase la presente Resolución en los estrados y en la página oficial de Internet, ambos del Instituto.

OCTAVO. Cúmplase lo resuelto.

Así lo aprobaron por unanimidad de votos, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina; las Consejeras Electorales Elizabeth Arredondo Gorocica, Claudia Ávila Graham, Maisie Lorena Contreras Briceño y María Salomé Medina Montañó; y los Consejeros Electorales Adrián Amílcar Sauri Manzanilla y Juan César Hernández Cruz, todos del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión ordinaria celebrada el día diez del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo.


MTRA. MAYRA SAN ROMÁN CARRILLO MEDINA
CONSEJERA PRESIDENTA


LIC. MAOGANY CRYSTEL ACOPA CONTRERAS
SECRETARÍA EJECUTIVA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, MEDIANTE LA CUAL SE DETERMINA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR REGISTRADO BAJO EL NÚMERO IEQROO/POS/013/2021, APROBADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.